

Santiago, veinticinco de febrero de dos mil veintidós.

Vistos:

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio, por sentencia de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, en los antecedentes RUC1.901.257.373-4, RIT: 68-2021 condenó a Rodrigo Andrés Escobar Concha, en calidad de autor del delito consumado de tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades, cometido el día 20 de noviembre de 2019, en el territorio jurisdiccional de dicho tribunal, a la pena de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio, a la pena de multa de dos unidades tributarias mensuales y a la pena accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena. Se le sustituyó la pena de presidio por la de reclusión parcial domiciliaria nocturna.

La defensa del acusado dedujo recurso de nulidad contra la indicada sentencia, el que se conoció en la audiencia pública de once de noviembre del presente año, citándose a los intervinientes a la lectura del fallo para el día de hoy, según consta del acta levantada al efecto.

Considerando:

Primero: Que, el recurso interpuesto se sustenta en la causal de nulidad contemplada en el artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, en relación con lo preceptuado en los artículos 5º Inciso 2º y 19 número 3 de la Constitución Política del Estado, esto con relación a lo preceptuado en los artículos 8.2 letra h) de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y artículos 5 y del Código Procesal Penal, toda vez que se efectuó un control de identidad y registro del acusado, sin que existiera indicio que lo permitiera, obteniendo así evidencias incriminatorias en su contra fuera de los supuestos legales que autorizan a



obtenerla, todos aspectos que cautelan el derecho a un procedimiento racional y justo.

En este caso en concreto, el control de identidad y posterior registro de vestimentas del acusado fue realizado con infracción de garantías fundamentales, y fuera de los límites señalados por el artículo 85° del Código Procesal Penal, toda vez que el imputado no se encontraba en ninguna de las hipótesis del artículo 85°. En efecto el artículo 85 del CPP señala de manera taxativa las hipótesis en las cuales procede el control de identidad. Dicha disposición, debe ser interpretada de manera estricta, conforme lo indica el artículo 5° del Código Procesal Penal, sin desatender su tenor literal.

El único antecedente para el control lo sería entonces que un sujeto se encontraba en un sector que habría distintas denuncias respecto de venta de drogas y que de acuerdo a los propios dichos de los funcionarios policiales, sólo ven a un sujeto parado en un sector, sacando un envase de golosinas, no lo ven realizando transacción, es más sólo uno de los funcionarios policiales aseguró verlo, pues al efecto el funcionario policial Sepúlveda siquiera aprecia esta situación, pues indica que otro funcionario que lo acompañaba ese día aparentemente habría apreciado a este sujeto, por tanto, solo tendríamos como indicio claro y objetivo que a juicio de los funcionarios los habilitaba, era que el imputado estaba en dicha intersección sin hacer ninguna otra conducta.

Pide invalidar la sentencia y el juicio oral, disponiéndose la realización de un nuevo juicio oral, prescindiéndose del auto de apertura la totalidad de la prueba de cargo.

Invoca como causal subsidiaria artículo 373, letra b) del Código Procesal Penal, toda vez que la sentencia recurrida ha aplicado erróneamente el derecho al condenar por el delito de tráfico de pequeñas cantidades del artículo 4 de la ley



20.000, cuando en realidad los hechos son constitutivos de la falta del artículo 50 de la ley 20.000.

A juicio de la defensa se produce una errónea aplicación del derecho al tener por acreditado el delito de tráfico ilícito de estupefacientes en pequeñas cantidades, desestimando las alegaciones de la defensa. Ello pese que en parte alguna de los hechos que se dan por acreditados, se señala si mi representado participo en alguna transacción como comprador (consumidor) o vendedor. Estima esta defensa que para que el porte o posesión de una cantidad pequeña de estupefaciente logre configurar el tipo penal del comentado artículo 4°, es menester que ello se dé en un contexto circunstancial en el que dicho porte o posesión sean en sí mismos indiciarios del propósito comercializador, lo que no se advierte en parte alguna de la prueba producida en contra de don Rodrigo Escobar, debiendo el tribunal de instancia sancionar a título de la falta del artículo 50 de la ley 20.000.

Segundo: Que la sentencia impugnada, en su motivo noveno, tuvo por acreditado el siguiente hecho: *“El día 20 de noviembre de 2019, aproximadamente a las 17.20 horas, en calle Pedro Montt, en la comuna de San Antonio, Rodrigo Andres Escobar Concha, mantenía al interior de un banano, un envase plástico “Gatolate Evercrisp” contenedor de 47 envoltorios de papel blanco cuadriculado con 8,5 gramos bruto (1,08 gramos neto) de pasta base de cocaína más la suma de \$6500.- (seis mil quinientos pesos)”*.

Tercero: Que la causal principal del recurso de nulidad presentado por la defensa, se sustenta en que los funcionarios policiales ejecutaron actuaciones fuera del ámbito de sus atribuciones, la detención y registro se verificó sin la existencia de algún indicio que los habilitara para efectuarlo.



Cuarto: Que, en lo concerniente a la infracción denunciada por el recurso de nulidad, cabe indicar que el debido proceso es un derecho asegurado por la Constitución Política de la República y que consiste en que toda decisión de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado y al efecto, el artículo 19, N° 3, inciso sexto, confiere al legislador la misión de definir las garantías de un procedimiento racional y justo. Sobre los presupuestos básicos que tal garantía supone, se ha dicho que el debido proceso lo constituyen a lo menos un conjunto de garantías que la Constitución Política de la República, los Tratados Internacionales ratificados por Chile que están en vigor y las leyes les entregan a las partes de la relación procesal, por medio de las cuales se procura que todos puedan hacer valer sus pretensiones en los tribunales, que sean escuchados, que puedan reclamar cuando no están conformes, que se respeten los procedimientos fijados en la ley y que las sentencias sean debidamente motivadas y fundadas.

Quinto: Que, en otro orden de consideraciones, en cuanto a las facultades autónomas de actuación que la ley le entrega al personal policial, así como lo referido al respeto del debido proceso, esta Corte Suprema ha señalado reiteradamente que la negativa a admitir prueba ilícita tiene como fundamento la concepción del proceso como instrumento de resolución jurisdiccional de litigios dentro del ordenamiento jurídico, lo que conduce a que todo acto que infrinja de manera sustancial dicho sistema debe ser excluido del mismo.

Sexto: Que en relación a las normas de procedimiento aplicables al caso concreto, resulta necesario proceder a su análisis a efectos de poder determinar si ellas han sido transgredidas y, en su caso, examinar si dicho quebrantamiento ha significado la vulneración de los derechos fundamentales del acusado, como denunció su defensa.



Séptimo: Que como se ha dicho en ocasiones anteriores por esta Corte, el Código Procesal Penal regula a lo largo de su normativa las funciones de la policía en relación con la investigación de hechos punibles y le entrega un cierto nivel de autonomía para desarrollar actuaciones que tiendan al éxito de la investigación. Tal regulación, en todo caso, contempla como regla general que su actuación se encuentra sujeta a la dirección y responsabilidad de los representantes del Ministerio Público o de los jueces (Sentencias Corte Suprema Roles N° 7178-17, de 13 de abril de 2017; N° 9167-17, de 27 de abril de 2017; N° 20286-18, de 01 de octubre de 2018; N° 28.126-18, de 13 de diciembre de 2018 y N° 13.881-19, de 25 de julio de 2019).

Es así como el artículo 83 del citado cuerpo normativo establece expresamente el marco regulatorio de la actuación policial sin orden previa o instrucción particular de los fiscales permitiendo su gestión autónoma para prestar auxilio a la víctima (letra a); practicar la detención en casos de flagrancia conforme a la ley (letra b); resguardar el sitio del suceso con el objeto de facilitar la intervención de personal experto de la policía, impedir la alteración o eliminación de rastros o vestigios del hecho, etcétera, (letra c); identificar testigos y consignar las declaraciones que ellos presten voluntariamente, tratándose de los casos de las letras b) y c) citadas (letra d); recibir las denuncias del público (letra e) y efectuar las demás actuaciones que dispusieren otros cuerpos legales (letra f). Sólo en las condiciones que establece la letra c) recién citada, el legislador autoriza a los funcionarios de la Policía de Investigaciones y de Carabineros de Chile a efectuar diligencias autónomas de investigación.

A su vez, los artículos 85 y 86 del Código Procesal Penal regulan el procedimiento de control de identidad, estableciendo la facultad de los funcionarios policiales para solicitar la identificación de cualquier persona sin



orden previa de los fiscales, en los casos fundados en que estimen que exista algún indicio de que aquella hubiere cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta; de que se dispusiere a cometerlo; de que pudiese suministrar informaciones útiles para la indagación de un crimen, simple delito o falta; en el caso que la persona se encapuche o emboce para ocultar, dificultar o disimular su identidad; facultando para el registro de vestimentas, equipaje o vehículo de la persona cuya identidad se controla, procediendo a su detención, sin necesidad de orden judicial, de quienes se sorprenda a propósito del registro, en alguna de las hipótesis del artículo 130 – que describe lo que debe entenderse por situación de flagrancia- así como de quienes, al momento del cotejo, registren orden de aprehensión pendiente.

Octavo: Que las disposiciones recién expuestas tratan, entonces, de conciliar una efectiva persecución y pesquisa de los delitos con los derechos y garantías de los ciudadanos, estableciéndose en forma general la actuación subordinada de los entes encargados de la ejecución material de las órdenes de indagación y aseguramiento de evidencias y sujetos de investigación al órgano establecido por ley de la referida tarea, los que a su vez actúan conforme a un estatuto no menos regulado -y sometido a control jurisdiccional-en lo referido a las medidas que afecten los derechos constitucionalmente protegidos de los ciudadanos.

Noveno: Que la determinación del necesario equilibrio contemplado por la ley entre los derechos del involucrado en el ilícito y la eficacia de la persecución penal importa traer a colación el contexto fáctico que rodeó las diligencias cuestionadas.



Que, el supuesto sobre el cual descansa el cuestionamiento del recurso resulta difícil de admitir, en cuanto se sostienen alegaciones de ilegalidad que no concurren en la especie a la luz de los siguientes hechos

Que, conforme establecen los sentenciadores en su considerando Décimo el procedimiento policial se inició en virtud de haber recibido denuncias denuncias previas respecto de la comisión de delitos de la ley 20.000 y otros en el sector, lo anterior ya da un contexto en el cual se desarrolla la actividad policial.

Posteriormente agregan “, pudiendo apreciar parte del grupo policial – integrado por los dos testigos y el suboficial Ortiz -a una distancia cercana, como el acusado manipulaba unos envoltorios que corresponde a aquellos que usualmente son usados en las transacciones de drogas, los cuales se encontraban dentro de un paquete de golosinas identificado como Gatolate de Evercrisp”, para luego añadir “el acusado fue observado cuando sacó del lugar donde se hallaban los envoltorios, manipulándolos”

Asimismo los sentenciadores indicaron que “, *el hecho que habilitó este control de identidad, como ya se explicó, consistió precisamente en haberse observado a una escasa distancia al acusado mientras manipulaba elementos que a ambos impresionaron como envoltorios de droga, los cuales llevaba ocultos, según refirieron ambos testigos de cargo, la que fue apreciado directamente, por al menos uno de éstos. Fue esa conducta en concreto la que cuenta con las características propias de una transacción de estupefacientes, aquella que habilitó al personal policial a proceder a su control de identidad, en los términos del artículo 85 del Código Procesal Penal. Así las cosas, se trató de una conducta analizada objetivamente, exenta de apreciaciones personales, la que cumple con los requisitos para ser considerada como un indicio en los términos del referido artículo 85 del código adjetivo, desechándose por tanto esta alegación y, por*



consiguiente, la petición de valorar negativamente la prueba de cargo y, por ende, tendiente a lograr la absolución del acusado.” Esta Corte comparte dicha conclusión, ya que no estamos frente a una suposición, por el contrario es un hecho concreto y objetivo que llevó a los funcionarios policiales a efectuar el registro del imputado.

Décimo: Que, el tribunal da por cierto que los funcionarios policiales primero se encontraban realizando un operativo dadas las denuncias que habían recibido de actividades de tráfico en el sector, ya con dicha información y antes de detener al sentenciado un funcionario a lo menos, pudo observar a corta distancia como el imputado manipulaba los papelillos que llevaba dentro de un paquete de golosinas.

Undécimo: Que, entonces, sobre la base de las circunstancias fácticas antes reseñadas, se debe concluir que aquéllas conforman un indicio suficiente que habilitaba a los policías para realizar el control de identidad y posterior registro, teniendo en consideración que, como el mismo artículo 85 del Código Procesal Penal prescribe, esa actuación debe ser el resultado de una “estimación” que debe realizar el propio policía “según las circunstancias”, debiendo ocuparse esta Corte únicamente de descartar una actuación arbitraria de los agentes estatales en el desempeño de sus labores preventivas, arbitrariedad que no se observa en la especie desde que el control recae sobre el imputado toda vez que fundadamente concluyeron que los papelillos que manipulaba el imputado eran contenedores de droga, ello teniendo presente la denuncia que los llevó a efectuar patrullajes en el lugar, sumado a que los papeles que manipulaba el imputado fue observado a una corta distancia entre 2 a 6 metros, a lo que se agrega que los papeles blancos el imputado los sacaba desde un envase de golosinas, teniendo



presente además que dichos papeles son utilizados frecuentemente para la venta de droga

Décimo Segundo: Que, en razón de lo expuesto cabe concluir que no se divisan infracciones que vulneren los derechos que la ley y la Constitución Política de la República les reconoce a los acusados, por lo que este arbitrio, por la causal principal, deberá ser desestimado.

Décimo Tercero: Que corolario de todo lo que se ha venido razonando, es que no se han vulnerado los derechos al debido proceso y a la libertad personal del imputado Pardo Aguilera como se acusa por el recurrente, motivo por el cual no se configura la causal de nulidad de la letra a) del artículo 373 del Código Procesal Penal invocada en el arbitrio, el cual no podrá prosperar.

Décimo Cuarto: En cuanto al motivo subsidiario de nulidad toda vez que la sentencia recurrida ha aplicado erróneamente el derecho al condenar por el delito de tráfico de pequeñas cantidades del artículo 4 de la ley 20.000, cuando en realidad los hechos son constitutivos de la falta del artículo 50 de la ley 20.000.

Décimo Quinto: Que el tribunal en su considerando Noveno dio por establecidos los siguientes hechos *“El día 20 de noviembre de 2019, aproximadamente a las 17.20 horas, en calle Pedro Montt, en la comuna de San Antonio, RODRIGO ANDRES ESCOBAR CONCHA, mantenía al interior de un banano, un envase plástico “Gatolate Evercrisp” contenedor de 47 envoltorios de papel blanco cuadriculado con 8,5 gramos bruto (1,08 gramos neto) de pasta base de cocaína más la suma de \$6500.- (seis mil quinientos pesos)”*

Hechos que dada la naturaleza de la causal invocada no son cuestionados por la defensa

Décimo Sexto: Que los sentenciadores en el considerando undécimo se refieren a la calificación jurídica de los hechos señalando *que “1.- En cuanto al*



verbo rector: La prueba de cargo fue suficiente para acreditar la conducta desplegada por el enjuiciado, consistente en el porte de droga en una bolsa de golosinas que el encartado llevaba en el interior de un bolso tipo banano que llevaba en su hombro, hecho que los funcionarios policiales pudieron apreciar y contar en estrados, tal como se indicó supra.

Atendidas las circunstancias que rodearon los hechos, a saber, el encontrarse oculta la droga en una bolsa de golosinas que, a su vez, llevaba en un banano, dosificada en 47 envoltorios usados conocidamente en la transacción de esta sustancia ilícita, aunado a la naturaleza de la misma y su pureza en un 65% y encontrándose en un lugar público respecto del cual se habían ya efectuado denuncias en cuanto se estarían cometiendo ilícitos de este tipo, permitieron colegir a estas sentenciadoras que la misma, necesariamente, se encontraba destinada a ser distribuida ilícitamente, descartándose así la petición subsidiaria de la defensa en cuanto a entender que dicha sustancia estaba destinada a su consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo, máxime si no se allegó antecedente probatorio alguno que permitiera ilustrar al respecto.”

El tribunal atiende una serie de factores para concluir que la sustancia incautada al sentenciado tenía como propósito ser puesta en circulación, en efecto concluye ello a partir de cómo era llevada la sustancia, esto es, escondido dentro de un envase de dulces, la dosificación de la misma, esto es 47 papelillos, utilizados habitualmente para la transacción de droga, el hecho de justamente que lo que justificaba la presencia policial eran las denuncias por tráfico, es decir es un cúmulo de antecedentes que concatenados entre sí, que lleva a esta Corte a compartir la conclusión arribada por lo sentenciadores en orden a calificar el hecho como constitutivo del delito de tráfico ilícito de estupefacientes en pequeñas cantidades, previsto en el artículo 4° de la Ley 20.000.



Décimo Séptimo: Que, como se constata de la lectura del fallo, las circunstancias en que se produjo el control de identidad del imputado, fueron el meollo de lo discutido en el juicio oral cuya invalidación aquí se pretende, instancia en que la prueba rendida fue sometida al escrutinio de todos los intervinientes así como del tribunal, ello bajo el respeto de los principios de bilateralidad de la audiencia, oralidad, publicidad derivado de lo anterior es que en esta sede de nulidad no pueden desconocerse dichos hechos asentados por los magistrados del grado, para sustituirlos por aquellos que se desprenderían de los antecedentes incorporados ante esta Corte de conformidad al artículo 359 del Código Procesal Penal, pues ello permitiría transformar el recurso de nulidad en una nueva instancia para discutir los hechos ya fijados por el Tribunal y se instalaría de paso una oportunidad para que el recurrente debata nuevamente los presupuestos fácticos establecidos por los sentenciadores de la instancia. Así las cosas, dado que la jurisprudencia se ha uniformado en entender que el juicio oral constituye una etapa más -adicional a la audiencia de preparación de juicio oral- para discutir y probar la ilicitud de la prueba de cargo, ello trae aparejado que para estimar cumplido el requisito previsto en el artículo 377 del Código Procesal Penal de haber preparado el recurso, dicha ilicitud debe ser reclamada oportunamente en el juicio oral, lo que de paso conlleva entonces que el tribunal de la instancia siempre se habrá pronunciado sobre este asunto y determinado los hechos acreditados o no probados en relación a la alegación de ilicitud, hechos a los que como ya se explicó, en este particular tipo de casos, deberá estarse este Tribunal al resolver el recurso que afinque en la misma materia (en ese sentido, SCS, Rol N° 2519-18, 26 marzo 2018).

Por tal razón el recurso no puede prosperar.



Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 376 y 384 del Código Procesal Penal, **se rechaza** el recurso de nulidad deducido por la defensa del acusado **Rodrigo Andrés Escobar Concha**, contra la sentencia dictada con fecha dieciocho de agosto o de dos mil veintiuno, por Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio, en causa, RUC: **1.901.257.373-4 y RIT: 68-2021** y el juicio oral que le antecedió, los que, por ende, **no son nulos**.

Acordada con el voto en contra de los Ministros Sres. Brito y Llanos por los siguientes fundamentos:

1° Que, de acuerdo al artículo 85 del Código Procesal Penal, para proceder al control de identidad, debe existir algún indicio de que la persona de cuya identificación se trata haya cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta; de que se dispusiere a cometerlo o concurrir alguno de los demás supuestos que en dicho precepto se establecen.

Que, esta Corte ha reiterado a través de numerosos fallos que el indicio a que alude la ley debe atender “prioritariamente más bien a la aptitud, entidad y objetividad de los hechos y circunstancias conocidos o de que se da noticia a los policías, para dilucidar si se trata o no de un indicio de que la persona a fiscalizar “hubiere cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta o de que se dispusiere a cometerlo” —o se encuentre en alguno de los otros supuestos que trata la norma—, con abstracción de si esos hechos y circunstancias constituyen uno o varios indicios, sino únicamente a si los mismos justifican razonablemente la temporal restricción de la libertad personal de quien es sometido al control, de modo que con ello se descarte el uso arbitrario, antojadizo o discriminatorio de esta herramienta legal contra un sector de la población. Si se reemplazó “indicios” (pluralidad) por “indicio”, quiere decir que el singular y único deberá poseer la necesaria vehemencia y fuerza que sustituya a la antigua pluralidad. De esa



manera —como se suele señalar en relación a la valoración de la prueba testimonial—, ahora los indicios se pesan y no se cuentan para determinar si se cumple el presupuesto legal de encontrarse ante un “caso fundado”, extremo medular que se mantiene después de la Ley 20.931, para habilitar la realización de un control de identidad (entre otras, SCS N° 19.113-2017, de 22 de junio de 2017; SCS N° 29.596-2019, 21 de febrero de 2020; SCS N° 41.240-2020, 07 de mayo de 2020).

2° Que, en la especie aparece de manifiesto que aparece que los funcionarios policiales a cargo del procedimiento relataron que la conducta por ellos observada y que a su juicio configuró un indicio en los términos del artículo 85 del Código Procesal Penal, consistió en observar como el sentenciado manipulaba unos papeles blancos desde una bolsa de golosinas.

Que, tampoco pueden darse por concurrentes en este caso las demás situaciones que detalla el artículo 85 ya citado, desde que el único hecho asentado para motivar la actuación policial es la manipulación de unos papeles blancos desde una bolsa de golosinas, neutros desde una perspectiva jurídico-penal.

El Ministerio Público se ha encargado de precisar que la apreciación de los hechos indiciarios tiene que sustentarse sobre la base de elementos objetivos a partir de los cuales sea razonable la afirmación de un hecho no conocido. Descarta, entre otras, las siguientes conductas o actitudes: "La actitud y perfil del sujeto, apreciadas de forma aislada y parcelada, la actitud evasiva, la actitud sospechosa, gestos y conductas dudosos, persona en evidente estado de nerviosismo." (Características, alcance y finalidad del indicio a que se refiere el artículo 85 del Código Procesal Penal, a propósito del denominado control de identidad investigativo", Rodrigo Honores Cisternas, Revista Jurídica del Ministerio Público, Nro 76, Agosto 2019, pp. 181 y s.s.) Estas consideraciones del ente



persecutor avalan la solidez de los razonamientos expresados, que descartan la existencia de un indicio en el caso de autos.

3.- Que, como lo ha señalado anteriormente esta Corte, entre otros, en el pronunciamiento Rol N° 15.472-2017, de fecha 15 de junio de 2017, el control de identidad, al ser una diligencia que afecta las garantías constitucionales de los ciudadanos, no puede fundarse en apreciaciones subjetivas o interpretaciones de los policías respecto de las motivaciones que habría detrás de las acciones que presentan los individuos, sino que debe sostenerse en circunstancias objetivas y verificables, puesto que sólo de esa manera es posible dotar de validez, a luz de los derechos de los justiciables, a una actuación de carácter excepcional como la de la especie.

En esas condiciones, la mera afirmación de que un sujeto sacaba o manipulaba unos papeles blancos de un envase plástico “Gatolate Evercrisp”, es de un carácter eminentemente subjetivo y no da cuenta de algún elemento objetivo del cual pueda desprenderse algún indicio de que el acusado intentaba o se disponía a cometer un delito, sino sólo de la impresión o interpretación que hacen unos policías de su percepción sobre lo observado, pudiendo dicha conducta *-dada su neutralidad-* obedecer a múltiples factores diversos a la comisión de un ilícito, que mal pudo considerarse como constitutiva de un indicio, entendido éste como una conducta determinada y concreta que se comunica con la comisión del hecho punible, de aquellos que habilitan para efectuar un control de identidad en los términos del artículo 85 del Código Procesal Penal.

4.- Que, conforme lo antes expuesto, la conclusión a la que arribaron los juzgadores de la instancia, no resulta aceptable para este disidente, ya que se ha señalado reiteradamente, en lo atinente a la garantía constitucional del debido proceso, que el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos garantizados



por la Constitución Política de la República no conforman aquello que los jueces están llamados a apreciar libremente, sino que configuran presupuestos de legitimidad para la emisión de cualquier pronunciamiento sobre el caso sometido a su consideración.

Lo anterior es así porque *“sólo la verdad obtenida con el respeto a esas reglas básicas constituidas por los derechos fundamentales puede estimarse como jurídicamente válida. Lo que se trata de conocer en un proceso judicial no es, innecesario es decirlo, lo verdadero en sí, sino lo justo y, por tanto, lo verdadero sólo en cuanto sea parte de lo justo. Si ello es así –y así parece ser los derechos fundamentales delimitan el camino a seguir para obtener conocimientos judicialmente válidos. Los obtenidos con vulneración de tales derechos habrán, en todo caso, de rechazarse: no es sólo que su ‘verdad’ resulte sospechosa, sino que ni siquiera puede ser tomada en consideración”*. (Vives Antón: “Doctrina constitucional y reforma del proceso penal”, Jornadas sobre la justicia penal, citado por Jacobo López Barja de Quiroga en “Tratado de Derecho procesal penal”, Thompson Aranzadi, 2004, página 947).

5.- Que, de este modo, cuando los jueces del fondo valoraron en el juicio y en la sentencia que se pronunció los referidos antecedentes revestidos de ilegalidad, se incurrió en la materialización de la infracción a las garantías constitucionales del imputado, que aseguran su derecho a un debido proceso y a que la sentencia que se pronuncie por el tribunal sea el resultado de una investigación y un procedimiento racionales y justos, por cuanto dicha exigencia supone que cada autoridad actúe dentro de los límites de sus propias atribuciones, como lo señalan los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, lo que en este caso quedó de manifiesto que no ocurrió, infracción que solo puede



subsanarse con la declaración de nulidad del fallo y del juicio que le precedió, y con la exclusión de los elementos de cargo obtenidos con ocasión de ella.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Brito y la disidencia de su autor.

Regístrese y devuélvase.

Nº 65.464-2021

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Llanos S., y los Ministros Suplentes Sres. Rodrigo Biel M., y Miguel Vázquez P. No firman el Ministro Sr. Valderrama y el Ministro Suplente Sr. Vázquez, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con permiso y por haber concluido su período de suplencia, respectivamente.



En Santiago, a veinticinco de febrero de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

